

El Gremio Nacional de Abogados (NLG) de los Estados Unidos condena enfáticamente el golpe militar que tuvo lugar en Bolivia el 10 de noviembre, seguido por la presidencia autodeclarada de la senadora boliviana de extrema derecha Jeanine Áñez, en plena violación de la Constitución de Bolivia.

Hay pruebas contundentes de que funcionarios y organismos electos de los Estados Unidos trabajaron para fomentar este golpe de estado en el Estado Plurinacional de Bolivia contra el presidente electo Evo Morales, a expensas de los pueblos indígenas, los campesinos y los movimientos sociales de los pobres y la clase trabajadora y en violación de la Carta del Organización de Estados Americanos (OEA), la Carta de las Naciones Unidas, y las leyes y las resoluciones internacionales.

El papel de la OEA es particularmente preocupante, especialmente porque el liderazgo de la OEA está sirviendo como un apoderado de las maniobras políticas de Estados Unidos en toda la región, a pesar de la posición de muchos estados de América Latina en oposición a esta intervención.

También expresamos nuestra firme solidaridad con el pueblo de Bolivia que continúa marchando, organizando y resistiendo a pesar de enfrentar violencia dura y represión militar. Destacamos la importancia de terminar la intervención de los Estados Unidos en Bolivia y en toda América Latina e insta a la restauración del gobierno civil legítimo y la democracia en Bolivia.

El golpe de estado viola la Constitución de Bolivia

La elegibilidad del presidente Morales para postularse a la reelección fue establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que en 2017 abolió los límites del mandato por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta decisión anuló los resultados de un referéndum de 2016 que habría prohibido a Morales postularse.

El Tribunal Constitucional fue establecido por la Constitución boliviana de 2009. Es la autoridad final en Bolivia que adjudica la constitucionalidad de las leyes, el poder del gobierno y los tratados. No hay argumento de que la decisión del Tribunal estuvo fuera de la jurisdicción de su tema o de otra manera ultra vires. Por lo tanto, su decisión de establecer la elegibilidad del presidente Morales para la reelección fue final y vinculante. Los perpetradores del golpe no están contentos con el resultado de la decisión del tribunal. Pero los golpistas rechazaron el curso provisto por la Constitución de Bolivia para abordar su infelicidad, que sería elegir un nuevo presidente utilizando el proceso democrático establecido por la Constitución, quien podría nombrar a los miembros del Tribunal más a su gusto.

No hay argumento que el candidato de los golpistas, el neoliberal Carlos Mesa, perdió la primera ronda ante Morales. La única pregunta era el margen de la victoria de Morales. En lugar de unirse al llamado del presidente Morales para nuevas elecciones, los conspiradores

ganaron la delantera en el ejército y obligaron a Morales a salir con violencia y amenazas de fuerza. Como segundo vicepresidente del Senado, Añez, la autoproclamada presidente instalado por los golpistas, no estaba en la línea constitucional de sucesión. Todos los sucesores constitucionales renunciaron junto con Morales. La restauración de la autoridad constitucional requiere la restauración de Morales a la Presidencia. Luego, la elección podría volverse a ejecutar de conformidad con la Constitución y las leyes nacional e internacional, como ya propuso Morales antes del golpe, con Morales como candidato y con observadores de elecciones internacionales más creíbles y respetables que la Organización de Estados Americanos (OEA).

No hay resultados creíbles de fraude electoral: el fraude es un pretexto para el golpe

El período previo al golpe incluyó acusaciones de fraude electoral contra el presidente Morales. Principalmente, estas acusaciones se centraron en la afirmación de que Morales no pudo lograr legítimamente un margen del 10% por encima del candidato del segundo lugar, Carlos Mesa, evitando así una segunda vuelta en diciembre. Más comúnmente, una supuesta demora en la notificación de resultados se utilizó para respaldar estas acusaciones. Por supuesto, cuando se ejecutó el golpe de estado en Bolivia, Morales ya había acordado convocar nuevas elecciones, a pesar de la falta de pruebas o documentación que respalde estas acusaciones.

A pesar de la falta de evidencia de fraude electoral, la OEA emitió un comunicado un día después de las elecciones del 20 de octubre advirtiendo sobre un cambio “inexplicable” en la tendencia del conteo de votos. Esta declaración se produjo a pesar del hecho de que las áreas rurales en Bolivia han mostrado consistentemente resultados de informes más lentos, así como un mayor apoyo para Morales y su partido, el Movimiento Ante Socialismo (MAS). La OEA emitió un informe “preliminar” [cuestionando el resultado](#) de las elecciones del 10 de noviembre, poco antes del golpe de estado.

El [Centro de Investigación Económica y Política](#) (CEPR) presentó un análisis estadístico integral que no solo no encontró evidencia de fraude o irregularidades, sino que también indicó que la votación y el patrón de resultados reflejaban patrones muy similares de años anteriores, especialmente en términos de la demora en la presentación de informes de votos rurales.

[Investigaciones adicionales del CELAG](#) (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) también respaldaron este análisis y señalaron la evidencia insuficiente para respaldar las afirmaciones en la declaración de la OEA.

La OEA viola su propia Carta y sirve como brazo de la política exterior de los Estados Unidos

El papel del liderazgo de la OEA en Bolivia se hace eco de sus acciones en Venezuela, Nicaragua y en otras partes de la región. En Venezuela, el oficialismo de la OEA ha sido un defensor cada vez más vociferante del cambio de régimen, y sus pronunciamientos han estado

muy en línea con los mandatos de la política exterior de Estados Unidos. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha promovido en repetidas ocasiones la exclusión del gobierno venezolano internacionalmente reconocido de los organismos hemisféricos e internacionales y ha apoyado la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra el país, a pesar de su ilegitimidad en virtud del derecho internacional y sus efectos devastadores sobre los derechos sociales y económicos de la población venezolana. Estas acciones del liderazgo de la OEA socavan la legitimidad de la organización como representante de los estados americanos colectivamente.

A pesar de la preocupación expresada por la OEA con el orden constitucional en Bolivia, no logró condenar ni criticar el golpe militar o la presidencia autodenominada de Jeanine Áñez. La OEA tiene una larga historia de anticomunismo y fue fundada en una conferencia convocada por oficiales militares estadounidenses [al comienzo de la Guerra Fría](#) en 1948. Sin embargo, incluso con esta historia, la membresía de la OEA no ha estado de acuerdo con los planes de su liderazgo y sus patrocinadores estadounidenses, lo que provocó la creación del Grupo de Lima. No obstante, en 2018, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que ha proporcionado millones de dólares a grupos bolivianos contra Morales a lo largo de los años, [declaró que la OEA](#) promueve los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos en el Hemisferio Occidental al contrarrestar la influencia de países anti-EEUU como Venezuela.”

Estas acciones socavan la propia carta de la OEA, [que afirma apoyar](#) "la paz y la seguridad del continente". La carta de la OEA declara que "Todo Estado tiene derecho a elegir, sin interferencia externa, su sistema político, económico y social y a organizarse de la manera más adecuada para él, y tiene el deber de abstenerse de intervenir en los asuntos de otro Estado." Sin embargo, la OEA ha servido como un brazo de la política exterior de los EEUU. En la región, al mismo tiempo que los EEUU se han retirado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y han intentado socavar a las organizaciones multilaterales de derechos humanos.

Violación de la Carta de la ONU y las Resoluciones de la ONU

La Carta de la ONU también obliga a los países miembros a “abstenerse en sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado, o de cualquier otra manera incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.” Esta disposición de la Carta se amplía mediante la Resolución 2625 de la ONU, los Principios de Derecho Internacional sobre Relaciones Amistosas y Cooperación entre Estados, que deja en claro que este principio se aplica no solo a la intervención militar sino a otras formas de intervención, incluidas medidas coercitivas unilaterales como sanciones económicas. Un pilar del derecho internacional generalmente aceptado, [estos principios enfatizan la necesidad](#) de “la estricta observancia por parte de los Estados de la obligación de no intervenir en los asuntos de ningún otro Estado es una condición esencial para garantizar que las naciones vivan juntas en paz entre sí, ya que la práctica de cualquier forma de intervención no solo viola el espíritu y la letra de la Carta, sino

que también conduce a la creación de situaciones que amenazan la paz y la seguridad internacionales ... [y] el deber de los Estados de abstenerse en sus relaciones internacionales de los militares, política, económica o cualquier otra forma de coerción dirigida contra la independencia política o la integridad territorial de cualquier Estado.”

En Bolivia, como en Venezuela, Honduras, Cuba, Nicaragua, El Salvador y repetidamente en toda la región, el gobierno de los EE.UU. ha incumplido reiteradamente y sigue incumpliendo sus obligaciones bajo la Carta de la ONU, la Carta de la OEA y el derecho internacional. La cooptación de la OEA para no mitiga la responsabilidad del gobierno de EE. UU. por la actual desestabilización en Bolivia, incluidas las violaciones continuas del derecho a la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de prensa y el derecho a la vida misma. También observamos la grave amenaza a los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos plurinacionales de Bolivia, en particular los derechos de los pueblos indígenas. Bajo el gobierno de Evo Morales, liderado por el MAS, Bolivia [redujo la pobreza en un 42%](#) y la pobreza extrema en un 60%. El fomento de un golpe militar arriesga la destrucción de más de una década de avances que han visto a Bolivia [reducir su coeficiente de Gini](#), midiendo la desigualdad económica, en un 19%.

El golpe está liderado por grupos abiertamente fascistas, anti-indígenas e intereses oligárquicos.

La naturaleza racista y anti-indígena del golpe es evidente en las declaraciones de muchos de los líderes del golpe y las figuras públicas más reconocidas. Cuando Áñez se declaró presidenta de Bolivia a pesar de la falta de quórum en el Senado debido a la ausencia de senadores del MAS, el partido del presidente Morales, levantó una gran biblia, declarando que “La Biblia ha vuelto a el palacio,” haciéndose eco de [su tuit de 2013](#) de que las celebraciones de año nuevo de los pueblos indígenas aymara fueron “satánicas” y declarando que “nadie puede reemplazar a Dios.” (El pueblo aymara representa el 41% de la población plurinacional de Bolivia). También se hace eco de la retórica del defensor golpista de extrema derecha Luis Fernando Camacho, anteriormente afiliado a la [abiertamente fascista Unión Juvenil Cruceñista](#). Camacho ingresó al palacio presidencial después de la salida de Morales, sosteniendo una Biblia mientras uno de sus partidarios declaraba que “Pachamama nunca volverá al palacio. Bolivia pertenece a Cristo.”

Los aspectos anti-indígenas del golpe no se limitaron a declaraciones de destacados líderes de extrema derecha. El video fue ampliamente difundido con grupos pro golpistas en las calles de La Paz, quemando el Wiphala, la bandera cuadrada que representa a los pueblos indígenas de los Andes. Se fotografió a la policía cortando el Wiphala de los parches de la bandera en sus uniformes o bajando la bandera indígena desde el frente de las banderas estatales bolivianas. El Wiphala fue integrado por el gobierno de Morales como la doble bandera de Bolivia en 2009, junto con una nueva constitución.

En los días posteriores al golpe, se han documentado al menos 23 muertes a manos de fuerzas militares o policiales en Bolivia. Un decreto emitido por el autoproclamado presidente Áñez afirma que exime a los miembros del ejército o la policía del enjuiciamiento por crímenes cometidos durante la represión de las protestas contra el golpe. A pesar del papel que ha desempeñado el liderazgo de la OEA en Bolivia, [la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un brazo de ese organismo](#), expresó su profunda preocupación por este decreto y señaló que “ignora las normas internacionales de derechos humanos y alienta la represión violenta.”

El golpe de estado, como era de esperar, también implica a la oligarquía boliviana, cuyo control sobre la riqueza y los recursos continuó siendo desafiado por el gobierno del MAS y sus programas sociales. El mismo Camacho [tiene una alianza de larga data](#) con oligarcas separatistas y grandes terratenientes en el área de Santa Cruz de Bolivia. Los esfuerzos del gobierno hacia la nacionalización fueron más limitados que radicales. De hecho, muchos organizadores y movimientos sociales de izquierda e indígenas criticaron duramente al gobierno de Morales por las concesiones que hizo a los oligarcas y las corporaciones multinacionales. Sin embargo, el gobierno de Morales enfrentó una feroz oposición de figuras oligárquicas como Branko Marinkovic, un antiguo defensor de Camacho y ex presidente de la Federación de Industrias Privadas en Santa Cruz. Advirtió en 2006 que la búsqueda de una [reforma agraria conduciría a una “guerra civil.”](#) y fue acusado en 2009 de proporcionar \$200.000 a los conspiradores que planearon el asesinato de Morales. Huyó a Brasil, donde permanece hoy, un firme defensor del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro. La oligarquía boliviana ha mantenido una estrecha alianza con corporaciones extranjeras, incluidas compañías mineras canadienses, suizas y alemanas, que se han opuesto firmemente a las restricciones sobre sus actividades por parte del gobierno de Morales y han presentado demandas en un intento por perpetuar su [explotación de los recursos bolivianos](#). En particular, Bolivia alberga las mayores reservas de litio del mundo, un elemento necesario para el desarrollo de baterías de automóviles eléctricos. El futuro de la industria de litio de Bolivia y las personas y tierras afectadas por ella también están en juego.

Estados Unidos tiene una larga historia de desestabilizadores de los regímenes progresivos en Bolivia y en toda América Latina a través de la Escuela de las Américas

Hay una larga historia de participación estadounidense en la desestabilización y la dictadura en Bolivia. En la década de 1970, el general Hugo Banzer, un dictador militar de derecha, fue respaldado por Estados Unidos en su golpe de estado para derrocar al gobierno de izquierda de Juan José Torres, quien luego fue asesinado en la Operación Cóndor encubierta respaldada por Estados Unidos en Argentina. La academia de entrenamiento militar en Fort Benning, Georgia, ahora conocida como [WHINSEC y anteriormente como la Escuela de las Américas](#), ha capacitado a golpistas y violadores de los derechos humanos en toda la región durante décadas. Los infames manuales de capacitación utilizados en la escuela fomentaron abiertamente el uso del chantaje, la tortura y los ataques contra civiles.

Al menos seis figuras importantes en el golpe [fueron capacitadas en WHINSEC/School of the Americas](#). El comandante del ejército boliviano Williams Kaliman, quien emitió la “sugerencia” de que Morales renunciara solo unas horas antes que él, citando un “golpe de estado cívico, militar y político,” completó una clase allí en 2003. También se desempeñó como agregado militar de Bolivia en Washington. Mientras tanto, el comandante general de policía Vladimir Yuri Calderón Mariscal, quien presuntamente encabezó una revuelta policial el 9 de noviembre, anteriormente se desempeñó como Presidente de Agregados de Policía de América Latina en los Estados Unidos de América (APALA). Esta alianza de seguridad ha sido fuertemente criticada por intentar llevar a los departamentos de policía latinoamericanos al ámbito de seguridad de las agencias de inteligencia estadounidenses.

Los líderes políticos en los Estados Unidos apoyaron abiertamente el golpe

Los [audios filtrados publicados](#) antes del golpe implican al alumno de SOA Manfred Reyes Villa, un residente de EE. UU., En un complot para derrocar al gobierno de Morales. Cuatro ex oficiales militares, todos graduados de SOA, también son escuchados en las grabaciones. Pero lo más preocupante es que las grabaciones incluyen alardes de apoyo de varios funcionarios electos y designados de los Estados Unidos, incluidos Marco Rubio, Ted Cruz y Bob Menéndez. Rubio, en particular, no ha ocultado [su defensa para derrocar al gobierno boliviano](#), haciéndose eco de sus amenazas contra los gobiernos venezolano y cubano. También intentó intervenir e [impugnar la credibilidad](#) del proceso electoral boliviano.

Después del golpe, el [presidente Donald Trump](#) emitió una declaración “aplaudiendo ... al ejército boliviano,” y declarando que el golpe militar “envió una fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua ... Ahora somos uno acercarse a un hemisferio occidental completamente democrático, próspero y libre,” en un apoyo rotundo a la toma del poder por oficiales militares no elegidos.

NLG llama a la restauración del gobierno legítimo del MAS y al cumplimiento de la Constitución y las leyes bolivianas contra el golpe

El Gremio Nacional de Abogados apoya el movimiento del pueblo boliviano que marcha y lucha por deshacer el golpe y restaurar el gobierno legítimo de acuerdo con la Constitución boliviana. Se ha observado una fuerte respuesta de solidaridad en otros países de América Latina, incluidas movilizaciones masivas en Argentina, así como respuestas oficiales de México, Cuba, Nicaragua y Uruguay. Para los abogados, estudiantes de derecho, trabajadores legales y abogados de la cárcel en los Estados Unidos, es urgente que hagamos todo lo posible para detener las violaciones y violaciones de los derechos humanos en los Estados Unidos.